A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución.**

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE

España cuenta con un amplio sistema de protección social dirigido a atender las necesidades de las personas que se encuentran en situaciones de especial

vulnerabilidad.

En las últimas décadas se han hecho avances importantes, pero también se

han producido cambios sociales que requieren adaptar la legislación actual a la

nueva realidad social, a los retos demográficos que se nos presentan y a las

situaciones de necesidad puestas de manifiesto con la grave crisis económica.

En especial, en el caso de la infancia, pues los niños de hoy representan las

próximas generaciones de españoles. Y también, en un contexto en el que la

esperanza de vida es cada vez mayor, en el caso de las personas mayores,

cuyos sacrificios y esfuerzos han hecho posibles muchos de esos avances.

En el primer caso, en el marco de trabajo establecido en el Plan de Infancia y

Adolescencia aprobado durante la presente Legislatura, es necesario dar

respuesta a las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos del

Niño de Naciones Unidas e incorporar el interés superior del menor como

principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento.

Y, en el segundo ámbito, tras las mejoras introducidas en la gestión de la Ley

de Dependencia en aras de una mayor agilidad, equidad y sostenibilidad, así

como tras asegurar la sostenibilidad y mejora de las pensiones, es necesario

profundizar en medidas que refuercen los derechos y el envejecimiento activo

de las personas mayores.

Al mismo tiempo, en la línea del trabajo desarrollado durante la presente

Legislatura, es necesario seguir reforzando el papel del Tercer Sector de

Acción Social, pues su labor permite reforzar el apoyo a muchas familias que

atraviesan situaciones difíciles.

Después de destinar 3.000 millones de euros al pago de facturas de las

Administraciones Publicas pendientes con estas entidades, de reforzar las

subvenciones del IRPF destinadas a acción social y de impulsar tanto la

participación como el diálogo con estas organizaciones, es necesario adaptar el

marco normativo a la realidad actual de estas entidades, así como del

voluntariado.

Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar un Marco de Actuación para Personas Mayores que contemple las

orientaciones que han de guiar el envejecimiento activo y la solidaridad

intergeneracional adoptadas por el Consejo de la Unión Europea como

complemento de la Estrategia Europea 2020, de manera que se fortalezcan

los derechos individuales y sociales de las personas mayores, su

consideración como parte activa e indispensable de la sociedad y fomentar

el respeto que todos les debemos. Con especial hincapié en:

a) La promoción de la salud, la prevención de la dependencia y el fomento

de la vida independiente.

b) Su participación en la sociedad, para evitar su aislamiento y

proporcionarles oportunidades de aprendizaje permanente.

c) La prolongación voluntaria de la vida activa, en base a la experiencia de

la vida laboral y del periodo previo a la jubilación.

d) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mayores, en

especial el caso de aquellos que se encuentran en situaciones de

vulnerabilidad.

- 2. Implementar y desarrollar la Ley de modificación del sistema de protección a la Infancia y a la Adolescencia dirigida a la actualización que precisa el marco legislativo puesto que La Ley de Protección Jurídica del Menor se aprobó hace casi veinte años y en este tiempo se han producido cambios sociales significativos que afectan a los menores de edad. Con ello se perseguirán, entre otros, los siguientes objetivos:
 - a) Agilizar el acogimiento y la adopción con el objetivo de que los niños puedan contar con el amparo de una familia.
 - b) Reforzar la protección de las familias numerosas.

- c) Reconocer a los menores como víctimas de violencia de género.
- 3. Impulsar la reforma de la Ley 6/1996, del 15 de enero, del voluntariado. Dos décadas después de la aprobación de esta norma, se hace necesario responder al contexto actual del voluntariado, establecer un marco de cooperación entre las Administraciones, respetando los ámbitos competenciales en cada caso y potenciando el valor del voluntariado para la sociedad y para las personas, en especial las más vulnerables.
- 4. Impulsar la aprobación de la ley del Tercer Sector de Acción Social con el objetivo de:
 - a) Fortalecer la capacidad de las entidades sociales como interlocutores ante las Administraciones Públicas garantizando su participación en las políticas públicas.
 - b) Concretar los principios del Tercer Sector y contemple medidas que favorezcan su fortalecimiento y sostenibilidad.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y

ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política

General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente Propuesta de

Resolución.

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael / ERNANDO FRAILE

PORTAVOZ

Algunos ejemplos relevantes son la implantación del Portal Único de Empleo, el

BOE a la carta, con servicios personalizados a través de códigos electrónicos y

alertas, o la receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud,

que está sustituyendo el tradicional formato en papel, permitiendo dispensar los

medicamentos en cualquier lugar, sin necesidad de presentar la receta

físicamente. Estas medidas se están completando con otras como la creación

de una base de datos de tarjeta sanitaria, la implantación de la historia clínica

digital interoperable, o del sistema la liquidación directa de ingreso de cuotas

de la Seguridad Social.

También se ha actuado en la eliminación de duplicidades, especialmente entre

la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, a partir

del convencimiento de que, en un Estado descentralizado, los resultados de la

reforma precisan del esfuerzo de todas las Administraciones.

Son muchas, asimismo, las medidas que persiguen favorecer al mundo

empresarial, avanzando en la contribución que las Administraciones Públicas

puedan aportar en términos de competitividad. Desde la simplificación y

reducción de cargas administrativas, hasta, por ejemplo, el nuevo esquema

para la creación de empresas, con la innovación del Portal "Emprende en 3".

Y, por supuesto, destacan aquellas medidas en proceso de implantación, que

pretenden fomentar la eficiencia del funcionamiento de la Administración y

evitar la acumulación de estructuras administrativas innecesarias. Así, la

racionalización y reducción de organismos y empresas en todas las

Administraciones (con la supresión de mas de 2.000 entidades), el avance en

la centralización de contratos (antes dispersos en los distintos Ministerios u

organismos) o la racionalización de la política inmobiliaria del Estado

(enajenando inmuebles sobrantes o eliminando arrendamientos innecesarios).

Dentro del conjunto de reformas que el Gobierno ha puesto en marcha en esta Legislatura, una de las de mayor trascendencia es la reforma de las Administraciones Públicas, y en particular, el conjunto de medidas que incluidas en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Desde que se presentó el Informe, se ha trabajado intensamente en la ejecución de las 222 medidas propuestas y que, a fecha de hoy, ya cuenta con un alto grado de cumplimiento. Las medidas de la CORA afectan a todos los ámbitos de la actividad de las Administraciones Públicas y son de diversa naturaleza, desde medidas normativas y regulatorias hasta iniciativas de mejora de la gestión administrativa.

El objetivo es conseguir una Administración más ágil y moderna, con procedimientos y mecanismos simples y sencillos, que permitan una fácil realización de los trámites administrativos. Especialmente, la sociedad demanda hoy en día una Administración eficiente. No basta que los servicios públicos se presten de forma correcta, sino que es imprescindible que esa prestación se realice favoreciendo una gestión racional de los recursos y procurando la mayor calidad posible en los servicios. Esto requiere la eliminación de solapamientos y duplicidades y la supresión de estructuras y costes innecesarios.

Con este objetivo, se ha prestado una particular atención al impulso de la Administración electrónica, con medidas normativas, organizativas y, sobre todo, con la puesta de nuevos mecanismos tecnológicos de relación con las empresas y los ciudadanos, avanzando en la consecución de una Administración totalmente telemática, abierta las 24 horas del día, ágil y eficaz. Estos avances están siendo reconocidos por organismos internacionales, como la ONU, que en su Informe de 2014, sitúa a España en el puesto número 12 de los 193 países analizados en el ámbito de la Administración electrónica.

Muchas de las medidas de reforma deberán completarse decisivamente con la

aprobación de un nuevo marco jurídico de las Administraciones Públicas. En

primer lugar en lo que se refiere a las relaciones externas de la Administración,

que se regularán en una Ley de Procedimiento Administrativo, que presta una

especial atención a la Administración electrónica, o al proceso de elaboración

normativa. Y, en segundo lugar, respecto a la organización y relaciones

internas y entre Administraciones, que se regularán en una nueva Ley de

Régimen Jurídico del Sector Público, que pone su acento en la coordinación

interadministrativa y en la simplificación, control y supervisión del llamado

sector público institucional.

Las medidas de la CORA están produciendo ahorros relevantes para el Estado,

las restantes Administraciones territoriales y para los administrados, pero,

sobre todo, están sentando las bases de una nueva Administración enfocada al

siglo XXI, donde la prioridad es dar servicio y apoyo a los ciudadanos y a las

empresas, creando un entorno que favorezca el crecimiento económico y el

bienestar social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el

artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del

Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la

siguiente propuesta de resolución:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Profundizar en los avances logrados por la Comisión para la Reforma de las

Administraciones Públicas en el impulso de la Administración Electrónica, la

reducción de cargas administrativas para empresas y ciudadanos, la

eliminación de duplicidades y la eficiencia en el funcionamiento de los

servicios.

- 2. Aprobar los Anteproyectos de leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público que han de definir un nuevo marco jurídico de las Administraciones Públicas.
- 3. Implantar en este ejercicio el sistema de subastas electrónicas, tanto judiciales, como notariales y administrativas en el Boletín Oficial del Estado; y avanzar en las adhesiones de departamentos del Estado y las Comunidades Autónomas en la Plataforma de Intermediación de Datos para el intercambio de certificados y documentos, evitando así su aportación por los ciudadanos.
- 4. Completar la implantación de los proyectos de receta electrónica e historia clínica digital interoperable, así como impulsar la puesta en marcha de la tramitación telemática de nacimientos y defunciones desde los hospitales.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución**.

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE PORTAVOZ

Sin perjuicio de estos avances, resulta necesario continuar trabajando en la mejora de la lucha contra el fraude, impulsando modificaciones normativas tendentes a potenciar el intercambio de información a nivel internacional, así como a incorporar mejoras en la Ley General Tributaria, dirigidas a reforzar las posibilidades de actuación de la Administración Tributaria y potenciar la concienciación social en relación con los efectos del fraude fiscal respecto de la financiación del sector público y a intensificar el reproche social hacia quienes no hacen efectivo el importe de sus deudas tributarias.

Asimismo, el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social supone una vulneración de los derechos de los trabajadores, pone en riesgo la viabilidad del estado del bienestar y constituye una fuente de competencia desleal que distorsiona la asignación de recursos. El Estado debe luchar con todas sus fuerzas contra esta lacra, tanto mediante una buena regulación que genere los incentivos adecuados como mediante la persecución de estas conductas.

El Gobierno aprobó en 2012 un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que ha permitido aflorar desde entonces 252.822 empleos, además de otros logros importantes en este ámbito. Estos avances se deben a la gran labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Es posible reforzar la lucha contra el fraude dotando de nuevas herramientas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e impulsando la coordinación con otros organismos implicados los servicios autonómicos, las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y los Juzgados y Tribunales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de resolución para incentivar la agilización y transparencia en la aplicación del sistema tributario.

España mantiene una posición muy firme en la lucha contra el fraude fiscal,

fenómeno que pone en peligro la financiación del Sector Público, así como el

cumplimiento de los principios de generalidad, justicia y equidad, inspiradores

del Sistema Tributario. En este ámbito, las modificaciones normativas a nivel

doméstico son necesarias, pero no suficientes, para combatir estas conductas.

Por ello, desde el punto de vista internacional, España mantiene una

participación muy activa en todos los proyectos que persiguen este objetivo:

organismos tales como el G-20, la OCDE, la UE, o el Foro Global de

Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. Entre dichos

proyectos se encuentra el de BEPS (en inglés, Base Erosion and Profit

Shifting), que persigue luchar contra el problema de la erosión de las bases

imponibles y los traslados de beneficios en el ámbito fiscal a nivel internacional.

Asimismo, en el ámbito nacional, con la Ley 7/2012 se avanzó en la prevención

y lucha contra este fenómeno, en base a la evolución de los comportamientos

fraudulentos y la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa

tributaria, con medidas como las limitaciones al uso de efectivo en

determinadas transacciones económicas o la creación de la obligación de

información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

The state of the s

En esta misma línea, las reformas normativas que recientemente han entrado

en vigor han incluido medidas que, directa o indirectamente, están

encaminadas a la lucha contra el fraude. Cabe mencionar, por ejemplo, las

modificaciones en la calificación de determinados instrumentos financieros

denominados "híbridos", o en materia de transparencia fiscal internacional u

operaciones vinculadas, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta

de Resolución:

"El Congreso de los Diputados a la adopción de las siguientes medidas:

1. Modificar la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria con el fin

de:

a. Posibilitar la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de

las obligaciones tributarias.

b. Regular la imposición de sanciones en casos de conflicto abusivo en la

aplicación de la norma tributaria.

2. Potenciar el intercambio de información fiscal con otros Estados mediante

las modificaciones normativas oportunas con el fin de perseguir el delito

fiscal.

· 門子のの 中本のおければない けんかがいませい

3. Acometer una reforma de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, que refuerce los instrumentos de lucha contra el fraude y

les dote de mayor autonomía, permitiendo, a su vez, una mayor

coordinación con las Comunidades Autónomas, las Fuerzas y Cuerpos de la

Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y los Juzgados y

Tribunales.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución.**

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael/HERNANDO FRAILE PORTAVOZ GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

La crisis económica ha acarreado preocupantes consecuencias sociales,

especialmente en los primeros años. Al inicio de la legislatura, España

arrastraba ya el mayor aumento de la desigualdad de toda la OCDE, la pobreza

había crecido 5 veces más rápido que en la Unión Europea y el paro se había

multiplicado por dos en la etapa socialista.

El Gobierno desplegó, desde el primer momento, una amplia agenda reformista

orientada a devolver a España a la senda del crecimiento garantizando, al

mismo tiempo, el mantenimiento y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

El impulso del Gobierno a las políticas centradas en las personas, como el Plan

de Acción sobre la Estrategia Española de Discapacidad, el Plan Nacional de

Acción para la Inclusión Social 2013/2016, el Plan Estratégico de Igualdad de

oportunidades, la Estrategia de Juventud 2020, o, la Estrategia Nacional para

la erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013/2016, conforman una

Agenda Social en la que se continúa avanzando para asegurar que la

recuperación económica se traduce en una progresiva mejora del bienestar de

los ciudadanos. En este sentido se ha puesto en marcha una amplia reforma

fiscal que pondrá en manos de los españoles 9.000 millones de euros.

A las ayudas para las madres trabajadoras puestas en marcha en el año 2002,

se han sumado en esta reforma nuevas deducciones para familias numerosas,

descendientes o ascendientes con discapacidad, además de una mejora de los

mínimos familiares.

En el nuevo escenario de recuperación económica, es necesario seguir

trabajando en la Agenda Social y en la extensión de los efectos de la mejora de

la economía y el empleo

Además, es necesario seguir avanzando en el objetivo de convertir la igualdad

legal entre mujeres y hombres en una igualdad real de oportunidades,

incidiendo especialmente en la prevención de la violencia de género así como

en la asistencia y protección a las mujeres que la sufren y a sus hijos e hijas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta

de Resolución:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. Aprobar y desarrollar el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017,

articulando una política integrada, transversal y coherente de apoyo a la familia,

como uno de los ejes de la acción política del Gobierno, en reconocimiento de

las funciones sociales fundamentales que desempeña. Los objetivos del Plan

se orientarán a:

a) Avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias con

medidas en el ámbito del empleo, la fiscalidad y las prestaciones sociales.

b) Favorecer la solidaridad intergeneracional y afrontar los retos

sociodemográficos del envejecimiento y la baja natalidad.

c) Garantizar la cohesión social mediante el apoyo a familias en situaciones de

especial necesidad o dificultad, como pueden ser las numerosas,

monoparentales, en riesgo de exclusión social, con personas dependientes

o con discapacidad, mayores, enfermos crónicos o que padecen violencia

intrafamiliar.

d) Facilitar la convivencia familiar mediante el fomento de la

corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

e) En este sentido y como continuación de la Reforma Fiscal, ampliar el

derecho a deducción de 1.200 € anuales a las familias monoparentales

formadas por un progenitor y dos hijos.

- f) Poner en marcha además, una bonificación del 100% en la cotización por contingencias comunes a la Seguridad Social de trabajadores autónomos durante 1 año cuando precisen reducir eventualmente su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores en situación de dependencia reconocida, siempre que contraten a un trabajador que les sustituya y permita el mantenimiento de la actividad.
- 2. Avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres con la aprobación de un Plan Especial para Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ámbito Laboral y contra la Discriminación Salarial, con el objetivo de garantizar la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el empleo y de prevenir y corregir la brecha salarial de género, mejorando para ello el conocimiento de las desigualdades retributivas y de sus causas.

3. Aprobar un Plan de Promoción de las Mujeres de Medio Rural, contemplando, entre otros, los objetivos de mejorar su inclusión sociolaboral, favorecer su participación económica, e impulsar su presencia en órganos directivos de cooperativas rurales, organizaciones agrarias y pesqueras, y grupos de acción local.

<u>A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS</u>

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y

ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política

General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente Propuesta de

Resolución.

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HÉRNANDO FRAILE

PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

La educación es la base del futuro de los países, porque de ella dependen las

posibilidades de realización de las personas y sus oportunidades para construir

un proyecto de vida y una carrera profesional. Garantizar el acceso a la

educación es la base de la igualdad de oportunidades y la cohesión social de

un país.

Por este motivo es imprescindible que España disponga de un sistema

educativo inclusivo, que no aboque a los alumnos a su abandono por la falta de

expectativas o de una atención adecuada a sus necesidades, que se base en

la libertad de elección y de opción, y que permita a las personas desarrollar su

pleno potencial.

Para lograr un sistema educativo que permita realmente la adquisición de

competencias y conocimientos y, en consecuencia, acceder a un empleo en el

futuro, los estudiantes tienen que encontrar una oferta educativa de calidad,

adaptada a sus necesidades en todos los niveles del sistema.

Por los motivos anteriormente expuestos el Congreso de los Diputados insta al

Gobierno a:

1. Continuar implantando y desarrollando las reformas necesarias para la

reducción del abandono educativo temprano y para la mejora de la calidad

educativa.

2. Potenciar la Formación Profesional en el sistema educativo español y, en

particular, los proyectos de Formación Profesional dual, que combinan

formación y empleo, en colaboración con las Comunidades Autónomas.

3. Seguir potenciando la internacionalización de las universidades españolas y

el desarrollo de un sistema universitario adaptado al Espacio Europeo de

Educación Superior y dirigido a favorecer la mejor formación posible para los alumnos y fomentar la creación y atracción de talento. En este contexto, se insta a llevar a cabo las acciones definidas en la Estrategia de Internacionalización y seguir avanzando en el proceso de internacionalización de las universidades españolas, en colaboración con la comunidad universitaria.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución**.

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE PORTAVOZ

El Gobierno ha conseguido dar un giro de 180 grados al mercado laboral, el

mayor reto que se encontró al iniciar la Legislatura en diciembre de 2011:

Se ha frenado el incremento de parados, ya que en diciembre de 2011, el número de parados crecía a un ritmo del 7,9% anual y, en estos momentos se

reduce en un -6,0%.

La economía española ha vuelto a crear empleo: en diciembre de 2011, se destruía empleo a un ritmo del -2% anual y, ahora, se crea empleo con una

tasa interanual del 2,5%.

Además, en diciembre de 2011, la contratación indefinida se reducía a un ritmo del -29,5% anual y, en este momento, aumenta con una tasa interanual del 22,2%; tres de cada cuatro trabajadores asalariados cuenta con un contrato

indefinido.

Sin embargo, la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno es consciente de que la principal preocupación del país y la mayor prioridad de la agenda reformista debe ser continuar impulsando la creación de empleo, con carácter estable y de calidad. Todavía quedan más de cuatro millones de personas en

desempleo, buena parte de ellos desempleados de larga duración.

Hay que recordar que en febrero de 2014 se puso en marcha una tarifa plana de 100 euros para las nuevas contrataciones indefinidas dirigida al empleo estable, que ha permitido que 204.586 personas encuentren un empleo

indefinido.

El 31 de marzo expira la vigencia de esta medida y, una vez consolidada la tendencia a crecimientos relevantes de la contratación indefinida, conviene concentrar el esfuerzo en los trabajadores más vulnerables, es decir, en aquellos que tienen más dificultades en encontrar un empleo estable, como son los jóvenes sin experiencia laboral, parados de larga duración o trabajadores

que carecen de cualificación o formación.

Conviene tener en cuenta, además, que una sistematización y armonización de las amplias posibilidades de bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social así como los incentivos al autoempleo, contribuiría a facilitar

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

el proceso de contratación de trabajadores, proporcionaría una mayor

seguridad jurídica a las empresas, especialmente a las PYME y permitiría

armonizar los requisitos y obligaciones legales para dotar de una mayor

simplicidad y coherencia al sistema.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta

de Resolución:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer un mínimo exento de cotización a la Seguridad Social de 500€ a

la contratación indefinida de nuevos trabajadores que supongan la creación

de empleo neto. Esta reducción de cotización no tendrá impacto en la

generación de derechos de prestaciones para el trabajador.

2. Sistematizar y armonizar las bonificaciones y las reducciones de cuotas a la

Seguridad Social así como el conjunto de incentivos al autoempleo."

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y

ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política

General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente Propuesta de

Resolución.

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafae HERNANDO FRAILE

PORTAVOZ

La situación de la economía española ha experimentado un gran cambio en

esta Legislatura. Gracias a las reformas económicas puestas en marcha hemos

dejado atrás la larga recesión y se han superado los desequilibrios que

lastraban nuestra capacidad de crecimiento, entre ellos la preocupante pérdida

de competitividad, que se traducía en la caída de la actividad económica, la

destrucción de tejido productivo y la de puestos de trabajo.

La mejora de la competitividad explica el comportamiento del sector exterior,

que ha sido extraordinariamente positivo en los últimos años. El peso de las

exportaciones de bienes y servicios en la actividad económica ha crecido en

España más que en todas las economías del G7 desde el año 2009, de modo

que a día de hoy ya supera el de todas ellas, con la única excepción de

Alemania. Además, hemos asistido a una fuerte diversificación de nuestros

mercados de destino.

The second of th

A lo largo de 2014, el Gobierno ha adoptado importantes iniciativas de apoyo a

nuestro sector exterior mejorando la eficacia y la coordinación de los

instrumentos de internacionalización, y su capacidad de competir, en línea con

los objetivos y medidas contenidos en el Plan Estratégico de

Internacionalización de la Economía Española. A ello también han contribuido

reformas las reformas estructurales acometidas en el ámbito financiero o en

sectores como la energía.

Por último, la política de investigación e innovación es un elemento

fundamental para la mejora de la competitividad y el progreso de un país. A lo

largo de esta Legislatura el Gobierno también ha impulsado medidas y

reformas que han permitido alinear nuestro sistema de I+D+i con los objetivos y

prácticas europeas concretados en el programa europeo Horizonte 2020 y que

se ponen de manifiesto en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de

Innovación.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

Por último. la política de investigación e innovación es un elemento

fundamental para la mejora de la competitividad y el progreso de un país. A lo

largo de esta Legislatura el Gobierno también ha impulsado medidas y

reformas que han permitido alinear nuestro sistema de I+D+i con los objetivos y

prácticas europeas concretados en el programa europeo Horizonte 2020 y que

se ponen de manifiesto en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de

Innovación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta

de Resolución:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Seguir trabajando para mejorar y diversificar los canales de financiación de

las empresas, en especial, las pymes, haciendo más flexible el acceso al

crédito bancario y desarrollando medios alternativos de financiación.

2. Contribuir desde el sector público a un sistema más racional de fijación de

precios y a la mejora de la competitividad, mediante el desarrollo de la

futura Ley de Desindexación, que evitará actualizaciones automáticas e

injustificadas de los precios.

3. Avanzar en la aplicación de los principios de unidad de mercado

acometiendo las reformas y adaptaciones precisas para este fin.

4. Continuar diversificando los mercados de destino, actualizando y dando el

seguimiento adecuado a los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados e

impulsando, en el seno de la política comercial de la UE, acuerdos de libre

comercio con países de interés estratégico para España, en especial con

EEUU, con el que la Unión Europea está negociando un acuerdo para

establecer la Asociación Transatlántica sobre el Comercio y la Inversión.

- Seguir defendiendo los intereses de las empresas españolas, mediante la gestión de los instrumentos de defensa comercial y uso de los mecanismos disponibles en la Unión Europea, organización Mundial de Comercio y OCDE.
- 6. Apoyar la consolidación de la presencia en mercados internacionales de las empresas españolas.
- 7. Continuar mejorando y afianzando los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización, aumentando su coordinación y eficacia.
- 8. Desarrollar la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización con el objetivo de impulsar el capital humano, la atracción de talento y la innovación.

· 新文明 人名英格兰 人名英格兰 生物

- 9. Procurar, teniendo en cuenta la senda de consolidación presupuestaria, potenciar la financiación de actividades de I+D+i, en particular para favorecer la investigación, la generación de conocimiento y la innovación mediante el apoyo estable de los centros y equipos de investigación punteros con proyectos de máxima calidad.
- 10. Favorecer el mantenimiento e incorporación de recursos humanos altamente cualificados al Sistema de I+D+i, con programas que favorezcan la atracción y estabilización del talento.
- 11. Incentivar la I+D+i empresarial, con el fin de fomentar la participación privada en la financiación y ejecución de I+D, especialmente de las pymes. Apoyar nuevas iniciativas lideradas por las empresas en áreas estratégicas que permitan aumentar la conexión y movilidad entre los agentes públicos y privados y consoliden las relaciones entre las entidades generadoras de

conocimiento y el tejido productivo y favorecer especialmente a las pymes innovadoras a través de las convocatorias de proyectos.

12. Impulsar una política energética que permita:

- a) Interconectar suficientemente la península ibérica para completar el desarrollo del mercado interior y hacer compatible el desarrollo de energías renovables con un precio competitivo de la energía.
- b) Estudiar proyectos concretos que permitan incrementar la interconexión eléctrica entre la Península Ibérica y Francia a la mayor brevedad posible bajo supervisión de la Comisión Europea, y con el compromiso entre los Operadores Técnicos de los Sistemas eléctricos de España, Francia y Portugal para hacer efectivo el compromiso del Consejo Europeo de tomar las medidas necesarias que permitan incrementar, a la mayor brevedad posible, el nivel de interconexión eléctrica de la Península Ibérica con el resto de la UE, a través del acuerdo de Francia, España y Portugal (junto con la Comisión Europea), respecto a qué proyectos defender de forma conjunta para beneficiarse de la financiación del Plan Juncker (y de fondos comunitarios)."

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución.**

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE PORTAVOZ

Como consecuencia de la grave crisis económica sufrida por España, ha

aumentado significativamente el número de los pequeños empresarios,

autónomos y familias que tienen dificultades para hacer frente a sus deudas.

El sector privado arrastraba un elevado endeudamiento, difícil de sostener y

que precisa medidas para facilitar su reducción ordenada, de la forma menos

traumática y más eficiente posible

Desde la entrada en el euro hasta el año 2010, el sector empresarial (no

financiero) multiplicó por más de 2 su endeudamiento en términos de PIB.

pasando del entorno del 60% de deuda sobre PIB al 134% en el año 2010. En

este mismo periodo, el endeudamiento de los hogares se duplicó en términos

de PIB, pasando del entorno del 40% hasta el 83%.

Desde entonces, el sector empresarial ha reducido su endeudamiento en 24

puntos porcentuales del PIB hasta un nivel del 110% (todavía por encima de la

media de la zona euro). En el caso de los hogares, la reducción del

endeudamiento ha sido de 11 puntos porcentuales del PIB, situándose en el

72%.

· 野はのと、大切のないないでは、人のは大力である。 ときもないでき

Asimismo, la crisis económica provocó que los deudores hipotecarios en

nuestro país se encontraran ante dificultades para hacer frente a sus deudas, lo

que podía implicar la pérdida de la vivienda hipotecada.

El Gobierno, ya a comienzos de 2012, puso en marcha medidas urgentes para

responder a esta situación, entre ellas el Código de Buenas Prácticas,

permitiendo que los colectivos más vulnerables pudieran afrontar su difícil

situación a través de la reestructuración de su deuda o incluso de la dación en

pago.

Del mismo modo, ya la Ley de Emprendedores, aprobada en 2013, prevé

medidas dirigidas a los pequeños empresarios acuciados por las deudas.

Ahora que la recuperación económica abre nuevas oportunidades, es si cabe

más necesario profundizar lo ya hecho con medidas decididas, que habiliten

nuevas oportunidades para que empresarios, emprendedores y familias

puedan hacer frente a su endeudamiento con mayor facilidad, superar las

consecuencias de proyectos fallidos y afrontar el futuro sin la losa de las

deudas que no son capaces de asumir y de las que hasta ahora no se han

podido liberar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta

de Resolución:

Por todo lo anterior el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar nuevas medidas encaminadas a los autónomos, las pymes y las

personas naturales, mejorando el diseño y funcionamiento del acuerdo

extrajudicial de pagos para que hogares y empresas tengan una

oportunidad de reestructurar y reducir su endeudamiento antes de

recurrir al procedimiento concursal.

2. Promover una habilitación para que, cuando estos acuerdos no sean

posibles, las personas naturales puedan liberar las deudas que queden

impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes, dando una segunda

oportunidad a los deudores de buena fe.

3. Reducir el plazo de prescripción de las acciones de reclamación de

deudas, para adaptarlo a los cambios en las formas de notificación que

se han producido, y permitir que las familias y empresas no tengan que

vivir pendientes de una deuda que no se ha reclamado en quince años.

4. Reformar el Código de Buenas Prácticas para permitir que se beneficien un mayor número de familias. Asimismo, promover la inaplicación de las cláusulas suelo para este mismo colectivo, de forma que puedan afrontar más fácilmente el pago de la hipoteca.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución.**

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE PORTAVOZ

España ha sido elegida a un puesto de miembro no permanente del Consejo de

Seguridad para el bienio 2015-2016. Una de las razones del éxito de la campaña

española ha sido el elevado compromiso, la alta participación y la buena

coordinación entre todos los Departamentos Ministeriales, la Presidencia del

Gobierno, la Jefatura del Estado y el Poder Legislativo. Todos los grupos

parlamentarios han apoyado la candidatura y muchos de sus miembros se han

involucrado activamente en la campaña, que constituye por lo tanto un éxito

colectivo.

Es deseable que este consenso entre las fuerzas y grupos políticos se

mantenga durante todo el bienio, y que el cambio de legislatura no afecte a las

obligaciones de nuestro país con el mantenimiento de la paz y estabilidad

internacionales ni a los compromisos asumidos durante nuestra campaña. La

política de seguridad y defensa, como primordial política de Estado, también ha

de implicar debates constructivos y búsqueda de acuerdos básicos

España es miembro del Consejo de Seguridad en un momento en que

confluyen amenazas particularmente graves para la paz y seguridad

internacionales y para la estabilidad de nuestra región.

Las Fuerzas Armadas españolas llevan 26 años prestando servicios bajo la

bandera de Naciones Unidas. Ello es una demostración indiscutible del

compromiso del firme compromiso de España con la paz y la seguridad

internacionales.

Por otra parte, también España contribuye a los esfuerzos de la Comunidad

Internacional para dar respuesta a las crisis y amenazas en el marco de la

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Unión Europea

(Política Común de Seguridad y Defensa). Junto con la ONU, ambas

Organizaciones constituyen elementos clave de la arquitectura de seguridad

internacional y España, como miembro de ambas, impulsa su desarrollo tanto

desde el punto de vista institucional, como operativo.

El contexto actual se caracteriza por la existencia de un arco de inseguridad que

rodea el continente europeo.

La crisis de Ucrania constituye la mayor amenaza para la paz y la seguridad en

Europa de las últimas décadas, tanto por la secesión y posterior anexión a

Rusia de Crimea y Sebastopol, como por la rebelión secesionista de la región

de la cuenca del Don. La OSCE ha desempeñado un importante papel de

mediación y observación en el conflicto, mientras se han sucedido distintas

iniciativas en favor de la paz; el denominado formato de "Normandía" (con la

participación de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania), alcanzándose el pasado

septiembre los Acuerdos de Minsk, refrendados y completados este mes de

febrero en la misma ciudad.

Estos Acuerdos han sido apoyados por la UE y endosados por el Consejo de

Seguridad el pasado 17 de febrero a través de la Resolución 2202

En Oriente Próximo se yuxtaponen distintos conflictos de impredecibles

consecuencias para la región y para la seguridad global.

El conflicto árabe-israelí es el más antiguo de todos ellos. Urge impulsar una paz duradera fundada en la solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz, seguridad y prosperidad. El Consejo de Seguridad debe contribuir al desbloqueo de la situación. Resulta también necesario que la Comunidad Internacional proteja la viabilidad de la solución de dos Estados.

El terrorismo internacional es una de las amenazas de mayor envergadura para la paz y la seguridad internacionales. La lucha global para poner fin al terrorismo perpetrado por el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria (DAESH en sus siglas en árabe), así como por otros grupos terroristas de la región, constituye otro de los grandes retos a los que debemos hacer frente. España es miembro activo de la Coalición Global contra DAESH que agrupa a más de 60 Estados y Organizaciones Internacionales, incluidos la mayor parte de los Estados árabes.

La guerra en Siria ha provocado desde 2011 más de 200 000 víctimas y un flujo masivo de desplazados y refugiados. España defiende una solución basada en un acuerdo entre el gobierno y la oposición para la constitución de un gobierno de unidad nacional que complete una transición política, de conformidad con el Comunicado de Ginebra de 2012. Asimismo, España ha tratado de promover el diálogo entre la oposición moderada siria a través del Proceso de Córdoba; y lidera en el Consejo de Seguridad las cuestiones humanitarias.

人名英格兰 医克勒氏性 医克勒氏性

El Gobierno de Iraq ha solicitado el apoyo internacional para combatir a DAESH, que ocupa una parte importante de su territorio. En el contexto de su participación en la Coalición Global contra DAESH, España está formando unidades del ejército iraquí para mejorar sus capacidades y apoya las políticas incluyentes del actual gobierno iraquí como vía para consolidar la unidad nacional y combatir más eficazmente a DAESH.

España preside los Comités que en el Consejo de Seguridad vigilan el cumplimiento y promueven las obligaciones en materia de no proliferación nuclear. En Irán la solución de la cuestión nuclear contribuiría a generar una dinámica regional de mayor confianza y estabilidad — Irán es un interlocutor ineludible en la región— con repercusiones positivas para el conjunto de la comunidad internacional.

En Libia asistimos a un deterioro de la seguridad, una fuerte crisis institucional con la aparición de dos gobiernos y dos parlamentos rivales y la extensión del terrorismo radical, incluido el de DAESH en diversas zonas del país. La mediación del Representante Especial de Naciones Unidas, Bernardino León, intenta un acuerdo de alto el fuego y la constitución de un gobierno de unidad nacional que permita al país retomar la senda de la transformación democrática y recuperar la estabilidad. España está comprometida con los esfuerzos encaminados a una Libia en paz y democrática y se ha ofrecido a albergar una conferencia internacional una vez que haya un acuerdo para un gobierno de unidad, que muestre el apoyo internacional para consolidar las bases de un proceso político inclusivo.

En la cuestión del Sáhara Occidental España - como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como miembro activo del Grupo de Amigos - sigue apoyando la labor de Naciones Unidas, de su Secretario General y de su Enviado Especial que acaba de realizar una nueva gira a la región en la que ha visitado Rabat, Nuakchott, Argel y Tinduf, así como Madrid. Asimismo, España apoya la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas.

Por los motivos expuestos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes acciones, en particular en el marco de la pertenencia de España al Consejo de Seguridad durante el bienio 2015-16:

- 1. A mantener y reforzar el compromiso con el multilateralismo y con los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
- 2. A promover activamente en el seno del Consejo de Seguridad los objetivos estratégicos priorizados durante nuestra campaña, en particular: la diplomacia preventiva; el mantenimiento y la consolidación de la paz; la protección de civiles y el respeto del Derecho Internacional Humanitario; la promoción y protección de los derechos humanos; la no proliferación nuclear y el desarme, particularmente desde la presidencia de los tres Comités del Consejo de Seguridad con competencias en materia de no proliferación; la lucha contra el terrorismo; el tratamiento de los nuevos desafíos globales a la paz y la seguridad; la lucha contra la delincuencia organizada transnacional; o la consideración de la cooperación al desarrollo como un instrumento preventivo al servicio de la paz y la seguridad.

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

- 3. A colaborar con la Unión Europea en el pleno desarrollo de la política común de seguridad y defensa. A este fin contribuiremos a la redacción de una nueva estrategia común, que sirva de base para orientar el desarrollo y puesta en común de capacidades así como para reforzar la industria europea de defensa.
- 4. A proseguir los trabajos encaminados al cumplimiento de los objetivos y compromisos suscritos en la Cumbre de la OTAN de Newport, garantizando la defensa de los aliados frente a cualquier amenaza

- 5. A continuar desarrollando las relaciones de colaboración en el ámbito bilateral con la finalidad de reforzar la seguridad mutua, con especial énfasis en la región mediterránea y las áreas más cercanas a este.
- 6. A seguir comprometidos con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y las operaciones de imposición de la paz. Para ello, nuestras Fuerzas Armadas seguirán participando en los operativos internacionales destinados a evitar o detener los conflictos, para lo que seguirán debiendo contar, como hasta ahora, con la autorización de las Cortes Generales.
- 7. A trabajar por incrementar la eficacia de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) y las Misiones Políticas Especiales (MPE), con mandatos robustos (especialmente en materia de protección de civiles), adecuados al contexto, precisos y realistas; así como recursos apropiados para su cumplimiento y a mantener un diálogo regular y sustantivo con los países contribuyentes de tropas.

The second of th

- 8. A agilizar, acelerar y asegurar el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, construyendo una fuerza conjunta alistada y eficaz para operaciones permanentes y de reacción, con capacidades adaptadas al marco estratégico.
- 9. A mantener la defensa de la de soberanía e integridad territorial de Ucrania; a continuar apoyar firmemente los Acuerdos de Minsk, urgiendo a las partes al estricto cumplimiento del alto el fuego y de todas sus disposiciones; a continuar fomentando la vía de firmeza y apertura al diálogo adoptada por la UE; a impulsar el papel de la OSCE para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados; y a continuar la línea marcada por las Resoluciones del CSNU, endosando los Acuerdos de Minsk y exigiendo la estricta observancia del alto el fuego.

- 10. A mantener y reforzar el compromiso de España con una paz justa y duradera en Oriente Próximo basada en la solución de dos Estados, Israel y Palestina, en el marco de los parámetros fijados por esta Cámara en su proposición no de Ley de 18 de octubre de 2014. Y para ello a intensificar los esfuerzos, muy especialmente dentro del Consejo de Seguridad, para que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones; a continuar trabajando por preservar la viabilidad de la solución de los dos Estados.
- 11. A seguir apoyando los esfuerzos de la Comunidad Internacional en la lucha contra el terrorismo, particularmente en el marco de nuestra participación en la Coalición Global contra DAESH.
- 12. A promover el diálogo intercultural e interreligioso a través del apoyo y la promoción de sinergias entre instituciones como la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, el Centro Rey Abdullah para el Diálogo Intercultural e Interreligioso de Viena, la Unión para el Mediterráneo, la Fundación Ana Lindh y otras iniciativas coincidentes en el ámbito mediterráneo, en el marco del XX aniversario de la Declaración de Barcelona este año.

- 13. A continuar contribuyendo a los esfuerzos internacionales a favor de una solución política para Siria, y a trabajar en la supervisión de la inutilización de instalaciones de producción de armas químicas, así como en la facilitación del acceso de ayuda humanitaria.
- 14. A mantener un apoyo continuado al Gobierno de unidad nacional en Iraq, participando en las iniciativas que fomenten la inclusión de las diferentes comunidades con vistas a fortalecer un proyecto común de convivencia desde el que hacer frente a la amenaza terrorista

- 15. A apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional en las negociaciones nucleares con Irán, particularmente desde la presidencia del Comité de Sanciones sobre Irán del Consejo de Seguridad, con el objetivo de avanzar hacia un Oriente Próximo libre de armas nucleares.
- 16. A mantener la defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de una Libia democrática e inclusiva, apoyando la mediación dirigida por el Representante Especial de Secretario General de Naciones Unidas, Bernardino León para facilitar una solución política a la actual crisis de seguridad e institucional; a seguir participando en los esfuerzos internacionales y del Consejo de Seguridad en favor de una solución política al conflicto; y a continuar el diálogo con los países vecinos y otros socios relevantes para mantener la unidad de la comunidad internacional sobre Libia.
- 17. A apoyar la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental en el marco de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas.

The second of th

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución**

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafae HERNANDO FRAILE PORTAVOZ

En la actual Legislatura se ha hecho un importante esfuerzo para gestionar de

manera eficiente las infraestructuras y los servicios de transporte. Se trata de

gestionar los recursos públicos con responsabilidad, siempre bajo principios de

eficacia, productividad económica, rentabilidad social y equilibrio y cohesión

territorial. En definitiva, lo importante es invertir con criterio, pensando siempre

en las necesidades de los ciudadanos.

El Gobierno ha apostado por la viabilidad y la sostenibilidad de las

infraestructuras de transporte desde una planificación adecuada, capaz de dar

respuesta a la demanda real.

と行う者と、生主者をはないと、ななるをなったな

Gracias a ello, en estos tres años se han conseguido importantes logros que

han modernizado las infraestructuras y los servicios de transporte.

En carreteras, se han priorizado las actuaciones que permiten dar continuidad

a los grandes ejes viarios estratégicos. Por ejemplo, hoy se puede viajar desde

Faro, Portugal, hasta Alemania, atravesando España por vías de alta

capacidad, al haber puesto en servicio los últimos tramos pendientes de la

autovía del Cantábrico A-8 en Galicia y Asturias.

De igual modo, en el caso del ferrocarril, se ha facilitado el acceso a mejores

servicios a un mayor número de ciudadanos, destacando la puesta en servicio

de las nuevas líneas de alta velocidad hasta Figueres y Alicante.

En lo referente al transporte ferroviario de viajeros, han dado comienzo los

servicios internacionales de alta velocidad con Francia. Además, se están

acometiendo reformas estructurales que posibilitarán una mayor oferta de

servicios, con precios más competitivos y que incrementarán la utilización del

transporte ferroviario.

Y, en el caso del transporte ferroviario de mercancías, Renfe-Mercancías está

dando importantes pasos para transformar el servicio de transporte en un

completo servicio logístico.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

En las infraestructuras portuarias, se han concluido relevantes actuaciones,

tales como la terminal de El Prat, en Barcelona; las obras de Punta

Langosteira, en A Coruña; o las obras en Isla Verde Exterior, en Algeciras.

Asimismo, en el ámbito aeroportuario se han producido importantes avances,

como la inauguración de la segunda pista en el Aeropuerto de Málaga-Costa

del Sol, el nuevo hub de una importante compañía aérea española en el

Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, o la ampliación de los edificios

terminales de Gran Canaria y Vigo.

Estas actuaciones posibilitan que las infraestructuras y los servicios de

transporte contribuyan a la recuperación económica. Como muestra, en 2014,

el tráfico por carretera ha crecido casi un 3%; Renfe ha tenido 468 millones de

viajeros, de los que 29 millones han sido en Alta Velocidad y Larga Distancia, lo

que supone un incremento del 16%; AENA ha tenido 196 millones de

pasajeros, con un crecimiento del 4,5%; y los puertos de titularidad estatal han

conseguido mover 482 millones de toneladas, lo que significa un incremento de

más del 5%.

Para tener idea de su importancia, considerando empleos directos, indirectos e

inducidos, se estima que casi 1.300.000 personas trabajan en el sector de las

infraestructuras y los servicios de transporte.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta

de Resolución:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- 1. Proseguir en 2015 la labor de impulso desarrollada durante esta Legislatura para la mejora y modernización de la Red de Carreteras del Estado, con el objetivo de culminar el cierre de itinerarios estratégicos de transporte para España, como la autovía A-8 en Cantabria, la autovía A-7 en Andalucía, o la autovía A-66 entre Benavente y Zamora, así como para la finalización de obras emblemáticas y de gran importancia y magnitud, como el Nuevo Puente sobre la Bahía de Cádiz.
- 2. Seguir avanzando en la finalización de las obras de infraestructuras de la red de alta velocidad ferroviaria que se encuentran en ejecución, con el objetivo de incrementar significativamente el número de viajeros en alta velocidad en los próximos años y conseguir este año 2015 mejoras de tiempos en más de 25 conexiones ferroviarias.
- 3. Continuar con la reestructuración de Renfe-Mercancías para procurar oportunidades de mejora en la eficiencia de su actividad.

The state of the s

- 4. Continuar trabajando en el desarrollo e implantación del paquete de medidas para la mejora del sector ferroviario, entre las que se encuentra hacer efectiva la implantación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria a partir del 1 de abril de este año.
- 5. Mejorar la competitividad de los puertos de interés general, como factor estratégico para la economía española y su capacidad exportadora, a través de:
 - a. La puesta en marcha del Fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria, una fórmula financiera que permitirá a las Autoridades Portuarias participar en la financiación de sus accesos fuera de la zona de servicio portuaria, mejorar la conectividad terrestre y, en especial, los accesos ferroviarios a los puertos, incrementando los niveles de inversión, para superar las debilidades de conectividad que condicionan la capacidad de crecimientos de nuestros puertos.

- b. Potenciar la colaboración público-privada en los puertos, con modelos ajustados a los estándares europeos, de manera que los inversores privados puedan afrontar las necesidades inversoras que exige la operativa portuaria, facilitándoles la captación de capital y la amortización de sus inversiones y, a la vez, pudiendo ofrecer mejores precios a los usuarios.
- c. Continuar el proceso de reducción de los costes portuarios, tanto públicos como privados, favoreciendo medidas de mayor eficiencia.
- d. Mejorar la coordinación de los controles en frontera en los puertos (aduaneros, sanitarios, de calidad comercial, de seguridad industrial y otros), para conseguir una mayor eficiencia de los servicios de inspección.

The second of th

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vígente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución**

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE PORTAVOZ

La duración y profundidad de la crisis económica ha provocado que un amplio

número de desempleados encuentre graves dificultades para recuperar un

empleo. Si bien la situación está cambiando a medida que avanza la

recuperación, las Administraciones Públicas tienen la obligación de facilitar y

acelerar su proceso de búsqueda activa de empleo e inserción a través de

servicios de empleo de calidad, que atiendan ampliamente las necesidades de

los ciudadanos.

El Gobierno ha impulsado a lo largo de esta Legislatura una profunda reforma

de las políticas activas de empleo que es necesario culminar y consolidar. Es

necesario avanzar en dos ámbitos:

Por un lado, concluir una nueva definición de la programación y coordinación

de las actuaciones de los distintos servicios de empleo. Para ello, una vez

aprobado el reglamento de los servicios públicos de empleo, debe continuarse

en el desarrollo de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-

2016.

Por otro lado, la formación de los trabajadores activos, ocupados o

desempleados, es un elemento esencial para aumentar las oportunidades de

inserción laboral y apostar por competir en talento en la economía global

actual. Para favorecer el trabajo de calidad es necesario asegurar una

formación de calidad.

Así, la formación para el empleo ha de responder adecuadamente a las

necesidades del sistema productivo, incrementar la empleabilidad de los

trabajadores de forma efectiva y contribuir a incrementar la competitividad de la

economía española. Para ello, su gestión debe ser transparente y orientarse a

resultados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente **Propuesta** de Resolución:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar una reforma sistemática del sistema de formación para el empleo de acuerdo a los siguientes principios:

- 1. Definir y desarrollar un sistema que asegure la calidad en los contenidos, concurrencia competitiva, eficiencia en la gestión y eficacia en términos de resultados. Para ello, es necesario delimitar un sistema de reparto eficiente de responsabilidades, entre las Administraciones y agentes implicados en la Formación Profesional para el Empleo.
- Impulsar una evaluación permanente de la calidad y del impacto real de la formación en términos de mejora en el desempeño en el puesto de trabajo o de inserción laboral y mantenimiento del empleo.

新子の一年の後機関的な神、学院大阪できない、年度とから

- 3. Promover nuevas fórmulas que permitan favorecer el acceso a la formación para el empleo, tales como una "cuenta-formación" que acompañe al trabajador a lo largo de su carrera profesional y el establecimiento de un "cheque-formación" que permita a un desempleado elegir la entidad de la que recibe formación, habilitando, para ello, los mecanismos de información y seguimiento necesarios.
- 4. Impulsar la regulación de la teleformación permitiendo, entre otras cuestiones, superar las limitaciones de un calendario formativo condicionado por la tramitación administrativa.
- 5. Favorecer la creación, dentro de la Inspección de Trabajo, de una Unidad Especial de lucha contra el fraude para el seguimiento y control de las actividades de formación con capacidad efectiva de sanción por irregularidades en este ámbito y el refuerzo de las sanciones para combatir el fraude.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución.**

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

La consolidación de la recuperación económica exige continuar reforzando el

apoyo a los diferentes sectores de la economía española, en particular la

industria, en términos generales, el turismo o el sector agroalimentario.

En España y en la Unión Europea la necesidad de conseguir un sector

industrial sólido se ha convertido en un objetivo irrenunciable.

Es necesario continuar impulsando reformas estructurales, como la reforma

laboral o la energética, así como avanzar en el impulso de programas de

fomento de la competitividad y de apoyo a actuaciones de reindustrialización

con instrumentos financieros flexibles adaptados a las necesidades de nuestra

industria que puedan ser puestos a disposición de las empresas durante todo el

año.

Del mismo modo, es necesario favorecer la plena adaptación de la industria a

la transformación que se está produciendo en el ámbito digital y en las

innovaciones tecnológicas precisas para competir en el mercado global.

Atendiendo a estas necesidades, la Agenda para el fortalecimiento del sector

industrial en España constituye el instrumento fundamental de los objetivos de

política industrial del Gobierno.

La Agenda contiene medidas concretas para estimular la demanda de bienes

industriales con efecto multiplicador en la economía; mejorar la competitividad;

incrementar la eficiencia y la orientación al mercado de la sociedad de la

innovación, desarrollo e investigación; apoyar la financiación no bancaria, la

internacionalización de empresas industriales y la diversificación de los

mercados e impulsar la estabilidad y la unidad de mercado en el marco

regulatorio.

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

En este contexto, hay que tener en cuenta el diálogo con los agentes sociales

para profundizar en la puesta en marcha de la Agenda y, en especial, de

aquellas medidas que reflejan una relación más directa con la creación de

empleo.

為其於一生是我情報一本一分於學者其一一生有人知

Así, en el marco de esta estrategia, son esenciales aquellas medidas de mayor

impacto sobre la competitividad del tejido industrial, como las dirigidas a reducir

los costes de transporte, mejorar las redes y conexiones internacionales, los

avances en la digitalización y la innovación de la industria, el fomento de la

eficiencia energética, la reducción de la morosidad, la promoción del talento y

la eliminación de barreras al crecimiento empresarial.

También hay que apoyar y reforzar la capacidad de sectores que están

desempeñando un papel fundamental en la recuperación económica, como el

turístico y el agroalimentario. Y la inversión en sectores industriales de alta

tecnología y capacidad de innovación como la producción de bienes de equipo.

o sectores de gran efecto arrastre sobre el conjunto de la economía, como la

renovación de viviendas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta

de Resolución:

Por lo tanto, sobre la base de estas realidades y fortalezas económicas, el

Congreso de los Diputados insta a:

1. Promover el diálogo con los agentes sociales, para impulsar aquellas

medidas de la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial que

tengan mayor capacidad de creación de empleo.

- 2. Impulsar reformas estructurales y medidas que contribuyan a mejorar la competitividad del tejido industrial a través de la reducción de costes básicos para los sectores industriales, como la mejora de la eficiencia energética, la reducción de los costes logísticos y de transporte, y los costes de financiación y una mayor flexibilidad del marco regulatorio que permita a las empresas optimizar sus costes.
- 3. Avanzar en la digitalización y la innovación de la industria, a través del impulso de los programas de I+D+i que fomenten la inversión privada en innovación y la colaboración entre empresas de distinto tamaño y distintos sectores al objeto de orientar la innovación hacia las necesidades de la sociedad.
- 4. Continuar con la segmentación de la oferta turística española con el objetivo de diversificar productos, territorios y mercados para mejorar la estructuración del turismo rural, de naturaleza y de interior, e impulsar a la unidad de mercado en el sector turístico.

The state of the s

- 5. Priorizar la promoción internacional de segmentos como la gastronomía, la cultura, la naturaleza, el turismo de salud y el de compras.
- Fomentar la modernización en el sector agroalimentario, mediante la puesta en marcha de un programa de innovación e investigación agraria, alimentaria y forestal, como instrumento para fomentar la competitividad del sector.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente **Propuesta de Resolución.**

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE PORTAVOZ

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

Los últimos datos económicos confirman que España ha retomado la senda del

crecimiento, tras un largo período de recesión y estancamiento. Persisten las

consecuencias de una crisis que ha sido excepcionalmente duradera, pero se

ha logrado, según atestiguan los datos económicos, revertir la tendencia

negativa de la actividad económica y del empleo, y se asiste en los últimos

trimestres a una aceleración de la mejoría en ambos aspectos.

España ha dejado atrás la incertidumbre del rescate, que ha logrado evitar, y

ha dejado de ser considerado un país que podría llegar a salir del euro. Se

encuentra ahora en una situación en la que lidera las perspectivas de

crecimiento y creación de empleo entre las principales economías europeas, y

las reformas acometidas y la recuperación iniciada se citan como ejemplo en

los foros internacionales, que reconocen el valor de lo conseguido, dadas las

difíciles circunstancias de partida. Esto a su vez ha permitido recuperar la

confianza de los españoles, tras un largo período de dudas y temores sobre su

futuro.

、行用的、主用機関係以及の公司的数である。これである

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Propuesta

de Resolución:

"El Congreso de los Diputados reconoce que:

a. España, gracias al impulso reformista del Gobierno y al esfuerzo de los

españoles, ha sabido superar las dificultades a las que se enfrentaba al

comienzo de esta Legislatura y se encuentra ya en la senda del

crecimiento económico.

b. El Gobierno ha puesto en marcha un amplio programa de reformas

estructurales, el mayor de la historia de nuestra democracia, diseñado

para lograr cambios duraderos en la economía.

c. Este programa ha permitido un cambio en el modelo económico español, que ha pasado de estar basado en el endeudamiento insostenible a cimentarse sobre la producción de bienes y servicios competitivos en los

mercados domésticos e internacionales.

d. Este cambio de modelo es patente en el excelente comportamiento de nuestro sector exterior, cuyo peso es ya superior al correspondiente a las principales economías del mundo, con la excepción de Alemania. La internacionalización de las empresas españolas, con un incremento de las empresas exportadoras del 22% en la Legislatura, es una muestra

contundente de los cambios operados en nuestro tejido productivo.

e. El Gobierno ha impulsado en España el mayor esfuerzo de consolidación fiscal de todos los países miembros del G-20, ha reordenado las cuentas de las Administraciones Públicas y ha asegurado la cobertura de los servicios públicos y el pago de las deudas

pendientes con proveedores.

f. La actividad económica ha recuperado el pulso y con ella la creación de tejido productivo, como certifican el dinamismo registrado respecto a la creación de empresas y altas de autónomos, en respuesta al decidido apoyo que desde el Gobierno se ha dirigido a facilitar el emprendimiento y promover la actividad en sectores punteros para la economía

española.

主於籍門之首 以為為軍事 一十次各國軍

g. La economía española ha recuperado, además del crecimiento, la capacidad de crear empleo, lo que ha permitido frenar el incremento desbocado del paro e iniciar la creación de empleo, que adquiere cada vez mayor vigor, de forma que en 2014 se han creado más de 400.000 puestos de trabajo.

CARRERA D

h. Como consecuencia del cambio de modelo productivo, la sostenibilidad

de las cuentas públicas, el crecimiento de la economía y la creación de

empleo, se ha garantizado el funcionamiento del Estado del Bienestar y

del conjunto de los servicios públicos, asegurando el poder adquisitivo

de los pensionistas y la sostenibilidad de las prestaciones, reforzando la

protección frente al desempleo, dando estabilidad a las ayudas que

reciben los parados que han agotado su prestación y creando, con el

acuerdo de los agentes sociales, un programa específico de activación

para desempleados de larga duración con cargas familiares.

i. Se ha puesto en marcha una reforma fiscal que rebaja los impuestos a

todos los españoles y, en mayor medida, a quienes cuentan con menos

recursos, e incorpora además ayudas específicas a las familias, inéditas

en nuestro país, que respaldan especialmente a aquellas que más lo

necesitan.

j. Estas reformas han supuesto el inicio de la recuperación y permiten

ahora al Gobierno anticipar una mejora en las perspectivas económicas

de nuestro país, de forma que el crecimiento alcance este año un 2,4%,

cuatro décimas más de lo previsto, y pueda esperarse la creación de

más de medio millón de empleos en este año 2015.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a. Que prosiga con determinación el camino iniciado hace tres años,

siempre guiado por el interés general, dirigido a afrontar la tarea de

superar los efectos que persisten de la grave crisis económica, así como

a consolidar la recuperación iniciada y extender sus efectos a todos los

niveles.

- b. Que continúe poniendo en marcha medidas que contribuyan a la transformación del modelo productivo español, incidiendo en fomentar una economía basada en la producción y no en el endeudamiento, potenciando la competitividad de los bienes y servicios que producen los españoles para responder a la demanda global y doméstica.
- c. Que continúe las acciones encaminadas a que los españoles puedan percibir cuanto antes y de la forma más intensa los beneficios derivados de los esfuerzos realizados, y continúe con el desarrollo de una Agenda Social dirigida a atender a las situaciones de especial vulnerabilidad de colectivos y familias, además de impulsar la igualdad de oportunidades como signo propio de una sociedad moderna y próspera.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y

ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política

General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente Propuesta de

Resolución.

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael HERNANDO FRAILE

PORTAVOZ

La Administración de Justicia, como pilar del Estado de Derecho, es un servicio

público que debe prestarse con cercanía, agilidad y sencillez. Es necesario que

la Justicia funcione para preservar los derechos y libertades de los ciudadanos

y asegurar una democracia plena, algo que exige velar por su independencia y

por la división de poderes que consagra nuestro marco constitucional.

Es necesario, por ello, trabajar por una Justicia al alcance de todos, que dé

respuestas ágiles, que sea igualitaria y que preste un servicio de calidad.

Se hacen precisas medidas que permitan acercar los servicios de la Justicia a

los ciudadanos y adaptarse a los usos cotidianos de nuestro tiempo, como el

email o las aplicaciones móviles.

La eficacia de la Justicia es además una de las condiciones para avanzar en la

calidad de la democracia. Este es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno,

que, desde el comienzo de la Legislatura, ha puesto en marcha todo tipo de

medidas dirigidas a la regeneración democrática, en particular, dotando al

Estado de nuevos medios e instrumentos para luchar contra la corrupción. Los

casos de corrupción han mermado la confianza de los ciudadanos en quienes

tienen la responsabilidad de representarles o gestionar sus recursos públicos.

Esta distancia entre los ciudadanos y los poderes públicos se ha convertido en

una preocupación de todos y, de forma muy especial, del Gobierno, que está

desarrollando toda una serie de iniciativas para luchar contra la corrupción.

Buena muestra de ello es el enfoque que sobre este asunto ofrecerán las

nuevas leyes reguladoras de la actividad económico-financiera de los partidos

políticos, la ley reguladora del ejercicio del alto cargo y la reforma del Código

Penal.

等等人 人名斯特里斯尔克奇 海東等級的軍事人 人名英格兰姓氏

Además, como complemento a estas normas, la reforma de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal, debe dirigirse a dotar a nuestra justicia penal de mayor

agilidad, con el fin de evitar dilaciones indebidas, modificando las reglas de

conexidad y fijando plazos máximos para la instrucción. Del mismo modo,

conviene avanzar en la efectividad del comiso de activos derivados del delito

para resarcir a la sociedad por el daño causado.

Asimismo, es necesario tener en cuenta en el ámbito de la Justicia a los

colectivos más vulnerables. De esta forma frente a la violencia de género, que

constituye una lacra para nuestra sociedad, se ha continuado avanzando con

medidas como la tipificación de nuevos delitos de matrimonio forzado,

hostigamiento o acecho, divulgación no autorizado de imágenes o grabaciones

íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, y la manipulación

del funcionamiento de dispositivos de control utilizados para vigilar el

cumplimiento de penas y medidas cautelares o de seguridad.

Es necesaria una especial atención a las víctimas de violencia de género, junto

con otros colectivos como son los menores, las víctimas de delitos de trata de

seres humanos, las personas con discapacidad, las víctimas de delitos contra

la libertad sexual, las víctimas de delitos racistas o de discriminación. Así se

establece en el Código Penal y en el Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima

del delito, que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de otorgar respaldo a

las víctimas, no sólo en el ámbito jurídico sino que minimice los efectos

traumáticos que la condición de víctima puede generar, una labor en la que es

necesario avanzar.

· 持てが、多数者を持てき、一定がかってあって、十五十五

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificando las reglas de

conexidad para evitar la dilación en las macrocausas y fijando plazos

máximos de instrucción.

CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 40, 2º - 28071 MADRID

- Agilizar la Justicia, generalizando el uso de las nuevas tecnologías y realizando las modificaciones necesarias en la Ley de Enjuiciamiento Civil, dirigidas a este objetivo.
- Facilitar el acceso a la Justicia de los ciudadanos, especialmente, exonerando a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias judiciales.
- 4. Poner en marcha la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos e implementar las nuevas figuras de decomiso para asegurar la reparación de las víctimas, evitar que el delincuente se beneficie del delito y potenciar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transfronteriza.

5. Continuar fomentando todas aquellas medidas necesarias para proteger a las víctimas, tanto en la implementación del Estatuto de la Víctima, como en la reforma del Código Penal y en todas aquellas modificaciones legislativas que el Gobierno ponga en marcha y de forma especial en lo referido a las víctimas de violencia de género.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y

ss. del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate de Política

General en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente Propuesta de

Resolución.

Madrid, 25 de febrero de 2015

Fdo.: Rafael-HERNANDO FRAILE

PORTAVOZ

La fortaleza de la sociedad española y de nuestro Estado de Derecho han sido

capaces de hacer frente a la violencia irracional e injustificada del terrorismo

desde hace décadas, que en nuestro país ha estado de manera continuada

protagonizada por la banda terrorista ETA.

Son las víctimas la consecuencia irreparable del terrorismo. A ellas les

debemos todos nuestro mayor homenaje y recuerdo, pero al mismo tiempo, es

deber de las instituciones perpetuar su memoria con el fin de evitar que nunca

más fenómenos terroristas se repitan y que una parte de la sociedad legitime el

uso de la violencia como medio para influir en la misma.

Gracias a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la

actuación de jueces y fiscales, la cooperación internacional y la entereza, valor

y testimonio de las víctimas el terrorismo de ETA ha sido vencido.

En la actualidad, el terrorismo de corte yihadista constituye la principal

amenaza a nuestra integridad, nuestra libertad y nuestros principios y valores.

Nuestros principales activos en la lucha contra esta amenaza siguen siendo los

mismos.

·新学者 大道町 報信者 かる物野な きし こうけんびき

Pero este terrorismo presenta características propias que requieren una

respuesta adecuada por parte de democracias sólidas como la española.

En esta línea, la reciente firma del Acuerdo para afianzar la unidad en defensa

de las libertades y en la lucha contra el terrorismo afianza la convicción de que,

en la ley y en la unidad, reside nuestro principal baluarte. El Acuerdo surtirá

mayor eficacia en la respuesta normativa frente a esta amenaza, en la medida

en la que en su desarrollo genere el mayor consenso posible.

La comunidad internacional, con España a la vanguardia, continúan explorando

medidas eficaces de respuesta al terrorismo y a la radicalización violenta, en

ámbitos que van desde la prevención, protección, persecución y respuesta.

Nuestro país no es ajeno a los efectos de la radicalización violenta, cuyo

desarrollo y propagación se han visto favorecidos por las convulsiones e

inestabilidad sociopolítica de determinadas regiones. Estas corrientes radicales

y violentas han aprendido a utilizar en su beneficio las ventajas inherentes a las

sociedades abiertas y globales, para extender su presencia y multiplicar sus

efectos, valiéndose de las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación para sus fines propagandísticos, logísticos o de reclutamiento,

así como para la comisión de atentados.

En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Propuesta de Resolución:

1. El Congreso de los Diputados reconoce la importancia del reciente

Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la

lucha contra el terrorismo y la necesidad de que en su desarrollo se trate

de alcanzar el apoyo del mayor número de fuerzas políticas.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a. Desarrollar el Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización

violenta, recientemente aprobado.

b. Impulsar y participar con el máximo compromiso en todas las iniciativas

internacionales para combatir el terrorismo yihadista, tanto en el ámbito

de la prevención, como en los terrenos operativos, policial y de

inteligencia.

c. Impulsar iniciativas legislativas que actualicen y refuercen el marco

jurídico frente al terrorismo.

- d. Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia.
- e. Constatar la necesidad de garantizar que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean un espacio seguro y libre, al servicio de los españoles, evitando que las herramientas tecnológicas y, en particular, las redes sociales, sean objetivo de organizaciones o individuos terroristas o medio empleado por éstas para conseguir sus fines.
- f. Continuar trabajando de forma prioritaria en las políticas de reconocimiento y de apoyo a las víctimas del terrorismo, bajo los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad que inspiran la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, el desarrollo del Proyecto de Ley de Estatuto de la Víctima del Delito; y en particular, mediante la puesta en marcha del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.